

Ejecución participativa en salud ambiental y seguridad sanitaria

Breve descripción:

Este componente se centra en la aplicación práctica de estrategias participativas que promueven la salud ambiental y la seguridad sanitaria. Se orienta al desarrollo de acciones comunitarias, la gestión responsable de riesgos y la implementación de prácticas sostenibles para fortalecer la protección de la salud colectiva.

Septiembre 2025

Tabla de contenido

Introducción	4
1. Participación comunitaria en salud ambiental	6
1.1. Mecanismos de participación social en salud	7
1.2. Comités de participación comunitaria y su conformación.....	8
1.3. Veedurías ciudadanas en salud ambiental y sanitaria	9
1.4. Derechos y deberes en salud de los actores comunitarios	11
2. Corresponsabilidad y empoderamiento comunitario	14
2.1. Principios de corresponsabilidad en salud ambiental	16
2.2. Identificación de actores involucrados.....	19
2.3. Coordinación de acciones compartidas con la comunidad.....	21
2.4. Fomento del empoderamiento ciudadano en la gestión ambiental	23
3. Ejecución, seguimiento y ajuste del plan de acción.....	26
3.1. Seguimiento a las actividades programadas	27
3.2. Gestión de recursos humanos, técnicos y financieros	29
3.3. Resolución de conflictos en la implementación del plan	30
3.4. Ajuste de estrategias según resultados y contingencias	33
Síntesis	36
Material Complementario	38

Glosario	39
Referencias bibliográficas	41
Créditos	42

Introducción

La ejecución participativa en salud ambiental y seguridad sanitaria busca promover la corresponsabilidad de la comunidad y las instituciones en la gestión de entornos saludables. Su propósito es fortalecer la prevención de riesgos y el cuidado colectivo mediante acciones coordinadas y sostenibles. Se desarrolla a través de la implementación de estrategias participativas, la aplicación de normativas vigentes y la integración de buenas prácticas que favorecen el bienestar individual y comunitario. Para comprender la importancia del contenido y los temas abordados, se recomienda acceder al siguiente video:

Video 1. Ejecución participativa en salud ambiental y seguridad sanitaria

Enlace de reproducción del video

<p>Síntesis del video: Ejecución participativa en salud ambiental y seguridad sanitaria</p>
<p>La salud ambiental en un territorio depende de la participación activa de la comunidad. A través de mecanismos de participación social, comités y veedurías ciudadanas, las personas identifican problemas, vigilan el cumplimiento institucional y toman decisiones que afectan su entorno. Cada actor tiene derechos y deberes que fortalecen la corresponsabilidad en salud.</p> <p>Cuando la comunidad y las instituciones trabajan juntas, se fortalece la corresponsabilidad. Este enfoque permite coordinar acciones, combinar</p>

conocimientos técnicos con saberes locales y fomentar el liderazgo y la autonomía. Así, la comunidad deja de ser receptora pasiva y se convierte en protagonista de su propio desarrollo.

La ejecución de los planes de acción requiere un seguimiento constante y la gestión eficiente de recursos humanos, técnicos y financieros. Durante este proceso pueden surgir conflictos de comunicación, roles, recursos o intereses, los cuales se resuelven mediante diálogo, mediación y acuerdos consensuados, manteniendo la armonía y el cumplimiento de los objetivos.

Además, los planes deben ajustarse según los resultados y las contingencias del contexto. Revisar indicadores, recibir retroalimentación comunitaria y tomar decisiones flexibles permite rediseñar estrategias, reasignar recursos o integrar nuevos actores. De esta manera, las acciones se mantienen pertinentes y efectivas frente a emergencias o cambios en el entorno.

En conjunto, la participación comunitaria, la corresponsabilidad, el empoderamiento ciudadano y la gestión adaptativa consolidan un enfoque integral de salud ambiental. Cada acción se convierte en un paso hacia territorios más saludables, sostenibles y resilientes, donde la comunidad es el motor del cambio y la mejora continua.

1. Participación comunitaria en salud ambiental

La participación comunitaria en salud ambiental se entiende como el conjunto de acciones mediante las cuales la población se involucra de manera activa en la identificación, análisis y solución de los problemas que afectan su entorno. Esta participación permite reconocer que la salud no depende únicamente de la atención médica, sino también de las condiciones ambientales, sociales y culturales que rodean a las personas.

El propósito de la participación comunitaria es fortalecer el empoderamiento colectivo, de modo que la comunidad sea capaz de tomar decisiones informadas, proponer alternativas y ejecutar actividades que contribuyan a la prevención de riesgos ambientales. De esta manera, se logra una corresponsabilidad entre ciudadanos, instituciones y autoridades para garantizar entornos más saludables.

Este proceso se desarrolla mediante la organización de grupos comunitarios, comités de salud, mesas de trabajo y programas de educación ambiental. A través de estos espacios, se promueve la construcción de soluciones locales como el manejo adecuado de residuos, el cuidado de fuentes hídricas, la prevención de enfermedades transmitidas por vectores y la promoción de hábitos de vida saludable.

En conclusión, la participación comunitaria en salud ambiental es una herramienta fundamental para generar cambios sostenibles y duraderos, ya que involucra directamente a quienes viven las problemáticas y fomenta un compromiso compartido en la búsqueda de la calidad de vida y el bienestar colectivo.

1.1. Mecanismos de participación social en salud

La participación social en salud se concibe como el derecho y deber de las comunidades para intervenir en la gestión, planificación, ejecución y evaluación de acciones que promuevan la salud y el bienestar colectivo. Este proceso fortalece la democracia, fomenta la corresponsabilidad y garantiza que las decisiones respondan a las necesidades reales de la población.

Entre los principales mecanismos de participación se encuentran:

- ✓ Comités de salud.
- ✓ Consejos territoriales de planeación.
- ✓ Asociaciones de usuarios.
- ✓ Veedurías ciudadanas.

Espacios donde la comunidad puede incidir en la formulación de políticas públicas y en el control social de los servicios de salud. Asimismo, las mesas de participación comunitaria permiten el diálogo directo entre instituciones y ciudadanos, promoviendo acuerdos y compromisos conjuntos.

Estos mecanismos funcionan de manera articulada con las autoridades sanitarias locales, regionales y nacionales, lo que facilita la construcción de planes de acción integrales, el fortalecimiento de la vigilancia comunitaria en salud ambiental y la promoción de entornos seguros y sostenibles. La inclusión activa de la comunidad en estos procesos contribuye a que las políticas de salud sean más equitativas, transparentes y efectivas.

1.2. Comités de participación comunitaria y su conformación

Los Comités de Participación Comunitaria en Salud (COPACOS), son instancias de representación ciudadana que permiten a las comunidades involucrarse activamente en la gestión y vigilancia de los procesos relacionados con la salud ambiental y la seguridad sanitaria. Su importancia radica en que constituyen un puente entre la ciudadanía y las instituciones del sector salud, promoviendo la transparencia, la corresponsabilidad y la toma de decisiones colectivas.

En Colombia, estos comités están respaldados legalmente por la Ley 100 de 1993, que establece la participación social como principio fundamental del Sistema General de Seguridad Social en Salud, y por la Resolución 2063 de 2017 del Ministerio de Salud y Protección Social, que define lineamientos para la organización y funcionamiento de los COPACOS en el marco de la Política de Participación Social en Salud.

La conformación de un Comité de Participación Comunitaria en Salud implica un proceso organizado que busca garantizar la representatividad y el compromiso de los actores comunitarios. Entre los pasos principales se encuentran:

- 1) Convocatoria comunitaria para informar a la población sobre la creación o renovación del comité.
- 2) Inscripción de candidatos que representen diferentes sectores de la comunidad.
- 3) Elección democrática mediante votación abierta en la comunidad.
- 4) Registro oficial del comité ante la secretaría de salud local o municipal.
- 5) Definición de roles y funciones de los integrantes, de acuerdo con los lineamientos legales.

Estos comités cumplen funciones clave como la veeduría ciudadana en salud, la formulación de propuestas de mejora, el seguimiento a planes locales de salud y la articulación con otras instancias de participación, lo que asegura que las acciones en salud ambiental respondan realmente a las necesidades de la comunidad.

De esta manera, los comités se constituyen como espacios de representación y diálogo donde la comunidad tiene la oportunidad de incidir en la gestión pública. Su importancia radica en que no se limitan únicamente a la supervisión, sino que también promueven la construcción colectiva de soluciones y el fortalecimiento del tejido social. En Colombia, existen diversas experiencias que describen cómo estos comités funcionan en la práctica y aportan significativamente al mejoramiento de la salud y el bienestar comunitario.

- ✓ En Medellín, los COPACOS han trabajado en proyectos de vigilancia de la calidad del aire y control de vectores en barrios vulnerables.
- ✓ En Cali, se han conformado comités comunitarios para acompañar procesos de saneamiento básico en zonas periurbanas.
- ✓ En municipios rurales de Boyacá, los COPACOS han liderado campañas de uso responsable del agua y manejo de residuos sólidos.

Estos ejemplos evidencian que los comités se adaptan a las necesidades del territorio y fortalecen la democracia participativa en salud ambiental.

1.3. Veedurías ciudadanas en salud ambiental y sanitaria

Las veedurías ciudadanas en salud ambiental representan un mecanismo de participación que fortalece el control social sobre las políticas, programas y proyectos que impactan la calidad de vida de las comunidades. A través de ellas, los ciudadanos

pueden ejercer vigilancia activa, proponer mejoras y garantizar que las acciones estatales respondan a las necesidades reales de la población.

En este sentido, sus funciones y alcances principales pueden observarse en:

- a) Vigilancia y control social sobre planes locales y proyectos relacionados con salud pública y saneamiento básico.
- b) Canalización de propuestas comunitarias para mejorar la gestión ambiental y sanitaria en el territorio.
- c) Seguimiento a la ejecución de programas en temas como agua potable, manejo de residuos y control de vectores.
- d) Articulación con instituciones estatales y comunitarias para fortalecer la respuesta frente a problemas ambientales que afectan la salud.
- e) Generación de reportes y alertas tempranas que contribuyen a la toma de decisiones oportunas.

Asimismo, las veedurías se convierten en espacios donde los ciudadanos expresan sus preocupaciones y generan aportes que fortalecen las políticas públicas. Para describir mejor su papel, a continuación, se destacan algunas acciones que suelen desarrollar:

- ✓ Supervisar la calidad del agua que llega a los hogares y reportar irregularidades a las autoridades.
- ✓ Promover campañas educativas sobre el manejo adecuado de residuos sólidos y reciclaje.
- ✓ Acompañar procesos de control frente a plagas y vectores que afectan la salud comunitaria.

- ✓ Monitorear el cumplimiento de planes locales de salud ambiental en barrios y veredas.
- ✓ Proponer soluciones frente a problemáticas relacionadas con la contaminación del aire o el ruido.

En conjunto, estas acciones permiten que la comunidad no solo vigile, sino que también construya activamente entornos más saludables y sostenibles.

Un ejemplo de su impacto en territorio es el caso de una veeduría comunitaria en el Tolima, donde campesinos organizaron un seguimiento a la calidad del agua de consumo humano. Gracias a su gestión, las autoridades ordenaron mejoras en la potabilización y distribución del recurso. Este tipo de experiencias demuestran cómo la acción comunitaria fortalece la salud ambiental desde el control social.

1.4. Derechos y deberes en salud de los actores comunitarios

Los derechos y deberes en salud y ambiente constituyen el fundamento ético, legal y social de la participación ciudadana en la gestión de la salud pública y la sostenibilidad ambiental. Reconocer estos derechos implica no solo exigir su cumplimiento, sino también asumir una corresponsabilidad activa en la protección del entorno, la promoción de la salud y el bienestar colectivo. Este principio orienta tanto la formulación de políticas públicas como las acciones comunitarias, y es un eje transversal del Plan Decenal de Salud Pública 2022–2031.

El marco normativo principal comprende:

a) Constitución Política de 1991:

- ✓ **Artículo 49:** reconoce el derecho a la salud como servicio público a cargo del Estado, y establece deberes de promoción, prevención y saneamiento ambiental.
- ✓ **Artículo 79:** garantiza el derecho a un ambiente sano y obliga al Estado a proteger la diversidad e integridad del ambiente.

b) Ley Estatutaria 1751 de 2015 – Derecho Fundamental a la Salud:

- ✓ Reconoce la salud como un derecho fundamental autónomo.
- ✓ Establece que las decisiones deben tomarse con participación social, bajo principios de equidad y sostenibilidad.
- ✓ Integra los determinantes sociales y ambientales como parte de la salud.
- ✓ Refuerza la corresponsabilidad entre Estado, instituciones y ciudadanía.

En este contexto, resulta fundamental comprender que la participación ciudadana en la salud ambiental y sanitaria no se limita únicamente a los espacios de control social, sino que también se sustenta en el equilibrio entre los derechos que garantizan condiciones dignas de vida y los deberes que comprometen a cada persona con la protección del entorno y la promoción del bienestar colectivo. Reconocer este marco de derechos y deberes fortalece la capacidad de la comunidad para asumir un papel activo, responsable y consciente en la construcción de un ambiente saludable y sostenible. A continuación, se presentan los principales derechos y deberes que orientan esta participación.

Derechos de los actores comunitarios:

- ✓ Acceder a servicios de salud oportunos, de calidad y sin discriminación.
- ✓ Vivir en un ambiente sano y exigir medidas frente a riesgos ambientales que afecten la salud.
- ✓ Participar en espacios de planeación, seguimiento y evaluación de políticas de salud y ambiente.
- ✓ Recibir información clara, completa y veraz sobre riesgos sanitarios, ambientales y epidemiológicos.
- ✓ Ejercer control social mediante comités, veedurías y otros mecanismos de participación.

Deberes de los actores comunitarios:

- ✓ Participar de manera activa en las actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.
- ✓ Adoptar prácticas de autocuidado y hábitos saludables en beneficio propio y colectivo.
- ✓ Hacer uso adecuado de los servicios de salud y recursos comunitarios.
- ✓ Contribuir a la protección del ambiente, evitando prácticas contaminantes y promoviendo el manejo responsable de residuos.
- ✓ Respetar las normas sanitarias y ambientales, apoyando las acciones de vigilancia en el territorio.

En conclusión, los derechos y deberes en salud y ambiente no son opuestos, sino complementarios: los primeros garantizan bienestar y calidad de vida, mientras que los

segundos promueven la corresponsabilidad de los actores comunitarios en la construcción de entornos más saludables y sostenibles.

2. Corresponsabilidad y empoderamiento comunitario

El ejercicio pleno de los derechos en salud y ambiente no puede entenderse sin el cumplimiento de deberes ciudadanos. La corresponsabilidad reconoce que todas las personas, familias, comunidades, instituciones y sectores sociales comparten la tarea de proteger el bienestar colectivo y cuidar los ecosistemas que lo hacen posible. Esta visión fortalece el empoderamiento comunitario, entendido como la capacidad de la población para organizarse, incidir y transformar su realidad territorial.

En la práctica, la corresponsabilidad se expresa en distintos niveles:

a) A nivel individual:

- ✓ Adoptar hábitos de vida saludables (alimentación equilibrada, actividad física, autocuidado).
- ✓ Evitar prácticas que contaminen o degraden el entorno (manejo adecuado de residuos, uso racional del agua y la energía, protección de la biodiversidad).
- ✓ Informarse sobre los riesgos del entorno y contribuir a prevenirlos.

b) A nivel comunitario:

- ✓ Organizarse para ejercer control social sobre la gestión pública y el cumplimiento de la normatividad sanitaria y ambiental.
- ✓ Participar en reuniones, jornadas ambientales y campañas educativas.
- ✓ Cuidar los bienes colectivos como parques, zonas verdes o redes de acueducto.
- ✓ Promover valores de solidaridad, respeto y cuidado mutuo.

c) A nivel institucional:

- ✓ Las entidades del Estado deben garantizar el ejercicio de derechos mediante políticas, servicios y acciones de vigilancia y control.
- ✓ Sectores como salud, ambiente, educación y desarrollo tienen la obligación de trabajar de manera intersectorial frente a los problemas que afectan simultáneamente la salud y el entorno.

Para que esta corresponsabilidad se convierta en práctica cotidiana, es necesario impulsar estrategias de socialización y educación comunitaria que permitan a la población conocer y apropiarse de sus derechos y deberes. Algunas de las más efectivas incluyen:

- 1) Talleres y encuentros comunitarios con metodologías participativas.
- 2) Cartillas y guías didácticas con lenguaje sencillo y atractivo.
- 3) Campañas educativas intersectoriales en escuelas, barrios y veredas.
- 4) Herramientas creativas como teatro, murales, radionovelas o títeres.
- 5) Redes sociales comunitarias y grupos de WhatsApp para convocar y compartir buenas prácticas.
- 6) Escuelas de formación ciudadana para fortalecer el liderazgo y la incidencia social.

Este enfoque debe ser territorial, diferencial y accesible, es decir, ajustado a las problemáticas locales, respetuoso de la diversidad cultural, étnica, de género y generacional, y disponible en formatos adecuados para todos.

En suma, la corresponsabilidad no es solo un deber ético, sino una apuesta política y social hacia una gobernanza comunitaria de la salud y el ambiente, donde Estado, comunidad y sector privado asumen compromisos compartidos para avanzar hacia la justicia social, la equidad y el desarrollo sostenible.

2.1. Principios de corresponsabilidad en salud ambiental

La corresponsabilidad en salud ambiental se sustenta en principios que orientan la acción conjunta de ciudadanía, instituciones y sectores sociales en favor del bienestar colectivo y la sostenibilidad de los territorios. No se trata solo de compartir tareas, sino de construir relaciones de cooperación, confianza, empoderamiento y reconocimiento mutuo, que fortalezcan una verdadera gobernanza participativa.

Estos principios son claves para que las políticas públicas se hagan efectivas, para garantizar el derecho a la salud y a un ambiente sano, y para avanzar hacia territorios más equitativos y sostenibles. Sin embargo, para que su aplicación responda a las realidades sociales y ambientales de cada territorio, es necesario incorporar enfoques orientadores que permitan guiar las acciones de manera integral, inclusiva y coherente con las necesidades colectivas.

- ✓ **Enfoque de derechos:** reconoce la salud y el ambiente como derechos fundamentales (arts. 49 y 79 de la Constitución). Implica que las personas son sujetos activos, con capacidad de exigir, participar y decidir sobre políticas y acciones que afectan su vida y su entorno. A la vez, obliga al Estado a garantizar acceso a servicios de salud, agua potable, saneamiento, espacios públicos saludables y educación ambiental.
- ✓ **Equidad:** la corresponsabilidad debe reconocer que no todas las personas ni territorios parten de las mismas condiciones. Por ello, exige acciones

diferenciadas que reduzcan desigualdades y eliminen barreras, priorizando a grupos en situación de vulnerabilidad (niñez, comunidades rurales, pueblos étnicos, mujeres cabeza de hogar, víctimas del conflicto, entre otros). Supone justicia ambiental, inclusión y redistribución equitativa de recursos y oportunidades.

- ✓ **Participación ciudadana:** la corresponsabilidad requiere comunidades activas, informadas y con poder real de decisión. La participación no debe limitarse a la consulta, sino permitir incidir en la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de acciones en salud ambiental, fortaleciendo la vigilancia de riesgos y la construcción de soluciones desde los saberes locales.

La corresponsabilidad se traduce en un reparto equilibrado de roles y compromisos, de acuerdo con las capacidades y competencias de cada actor:

a) Institucional:

- ✓ Formular políticas públicas integrales con enfoque de determinantes.
- ✓ Garantizar servicios básicos ambientales y sanitarios de calidad.
- ✓ Fortalecer mecanismos de participación y control social.
- ✓ Promover educación y comunicación en salud ambiental.
- ✓ Establecer alianzas intersectoriales y territoriales sostenibles.

b) Comunitario:

- ✓ Participar en espacios de concertación y veeduría.
- ✓ Organizar acciones colectivas para el cuidado del entorno.
- ✓ Movilizar y educar a otros actores de la comunidad.
- ✓ Ser voceros activos frente a las instituciones locales.

c) Familiar e individual:

- ✓ Practicar hábitos de cuidado personal y ambiental.
- ✓ Transmitir conocimientos sobre salud ambiental a niños y adolescentes.
- ✓ Evitar prácticas que deterioren el entorno (quema de residuos, contaminación de fuentes hídricas o acumulación de criaderos).
- ✓ Mantener el hogar como un entorno saludable.

Estos principios son claves para que las políticas públicas se hagan efectivas, garanticen el derecho a la salud y a un ambiente sano, y fortalezcan la construcción de territorios más equitativos y sostenibles. Para lograrlo, es necesario incorporar enfoques orientadores que permitan reconocer la diversidad de contextos, necesidades y actores sociales. Dichos enfoques aseguran que la formulación e implementación de las políticas no solo sean normativas, sino también inclusivas, participativas y coherentes con la realidad de las comunidades.

Algunos ejemplos de enfoques orientadores son:

- ✓ Enfoque de derechos que reconoce la salud y el ambiente sano como derechos fundamentales.
- ✓ Enfoque diferencial que atiende las particularidades de grupos poblacionales según edad, género, etnia o condición de vulnerabilidad.
- ✓ Enfoque territorial que considera las características ambientales, culturales y sociales de cada territorio.
- ✓ Enfoque participativo que promueve la intervención activa de la ciudadanía en la vigilancia y control de la gestión pública.

2.2. Identificación de actores involucrados

La corresponsabilidad en salud ambiental se construye a partir de la acción coordinada de múltiples actores sociales, comunitarios e institucionales, cada uno con competencias y responsabilidades que se complementan para garantizar la gestión de entornos saludables. Identificar estos actores y promover su articulación es esencial para que los procesos sean efectivos, legítimos y sostenibles, especialmente en territorios con condiciones de vulnerabilidad o riesgo sanitario.

La comunidad no solo es beneficiaria, sino protagonista en la identificación de problemas, la formulación de soluciones y la vigilancia de compromisos institucionales. Cuando se organiza, adquiere capacidad de gestión local y se convierte en garante de sus propios derechos. Entre sus expresiones más relevantes se encuentran:

- ✓ **Juntas de Acción Comunal (JAC):** canalizan necesidades colectivas y apoyan campañas de salud ambiental.
- ✓ **Comités de Participación Comunitaria en Salud (COPACOS):** inciden en decisiones locales y en la dimensión ambiental del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC).
- ✓ **Líderes sociales y comunitarios:** movilizan procesos desde el enfoque étnico, cultural, ambiental o religioso.
- ✓ **Redes de jóvenes, mujeres, cuidadores y promotores ambientales:** promueven educación, agricultura urbana, reciclaje y control de vectores.

Sus funciones principales incluyen identificar problemas del entorno, sensibilizar a la comunidad, vigilar compromisos institucionales e impulsar proyectos colectivos. Para que estas acciones sean efectivas, es necesario el concurso de diversos actores con responsabilidades diferenciadas pero complementarias:

- ✓ **Autoridades locales y sector salud:** los gobiernos locales (alcaldías y juntas administradoras locales) son responsables de integrar la dimensión ambiental en la planeación del desarrollo territorial, garantizando saneamiento básico, espacio público saludable y acceso a servicios sociales. El sector salud, a través de secretarías y Empresas Sociales del Estado (ESE), debe liderar el Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), realizar vigilancia sanitaria, gestionar riesgos ambientales y fortalecer la participación comunitaria.
- ✓ **Instituciones educativas y ambientales:** las instituciones educativas como escuelas, universidades y centros de formación como el SENA, son clave para formar ciudadanía ambientalmente responsable mediante Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), liderazgos estudiantiles e investigaciones locales. En el sector ambiental se encuentran secretarías, Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y oficinas de gestión del riesgo, las cuales aportan regulación, control, educación comunitaria y respuesta a emergencias ambientales.
- ✓ **Organizaciones sociales y no gubernamentales:** las ONG, cooperativas y otras entidades sociales complementan la acción institucional al aportar metodologías participativas, recursos técnicos y capacidad de gestión, fortaleciendo el tejido comunitario y la innovación social.

En conjunto, todos estos actores cumplen roles estratégicos y complementarios.

La corresponsabilidad en salud ambiental se hace posible cuando cada uno aporta desde sus competencias, generando alianzas para la construcción de entornos más saludables, equitativos y sostenibles.

2.3. Coordinación de acciones compartidas con la comunidad

La coordinación de acciones compartidas es un pilar fundamental de la corresponsabilidad en salud ambiental. Parte del reconocimiento de que ningún actor puede, por sí solo, garantizar entornos saludables o enfrentar los múltiples desafíos ambientales y sanitarios que afectan a los territorios. Por ello, resulta indispensable articular esfuerzos, capacidades, recursos y saberes de la comunidad, el sector público, las organizaciones sociales, las instituciones educativas y el sector privado.

Más que una acción operativa, la coordinación constituye una estrategia política y pedagógica que busca construir soluciones inclusivas, sostenibles y adaptadas a las realidades locales. Esto exige diálogo, confianza, planificación participativa y compromiso ético entre todos los actores.

Coordinar acciones implica pasar de una lógica vertical, donde las instituciones actúan y la comunidad solo recibe, a una lógica horizontal basada en la colaboración y la corresponsabilidad. En este proceso, se combinan el conocimiento técnico e institucional con el saber local y la experiencia vivida por las comunidades.

Los pasos centrales de esta construcción colaborativa son:

- ✓ Diagnosticar colectivamente los problemas del entorno (basureros a cielo abierto, vectores, contaminación del agua, etc.).
- ✓ Definir soluciones viables y adaptadas al contexto territorial.
- ✓ Asignar roles y responsabilidades claras de forma equitativa.
- ✓ Tomar decisiones en consenso, respetando la diversidad cultural, étnica, generacional y territorial.

Existen metodologías participativas que fortalecen la coordinación de actores y la planificación compartida:

- ✓ **Mapas parlantes o sociales:** la comunidad dibuja su territorio, identificando riesgos y recursos.
- ✓ **Matriz de actores:** relaciona instituciones, líderes y organizaciones con los apoyos que pueden brindar.
- ✓ **Árbol de problemas y soluciones:** analiza causas, efectos y posibles respuestas.
- ✓ **Cronogramas comunitarios:** establecen actividades, fechas y responsables de manera consensuada.
- ✓ **Acuerdos de corresponsabilidad:** pactos que definen compromisos, tiempos e indicadores de seguimiento.
- ✓ **Mesas intersectoriales de trabajo:** espacios de diálogo entre salud, ambiente, educación, comunidad y ONG.

Después de conocer los principales actores, derechos y deberes relacionados con la protección ambiental, es fundamental reflexionar sobre cómo estos principios se aplican en situaciones reales. Para ello, se presenta a continuación un caso práctico que permite analizar y comprender de manera concreta la importancia de la responsabilidad ciudadana y la gestión institucional en la preservación del entorno.

En el barrio Villa Esperanza (Cundinamarca), un basurero a cielo abierto fue transformado en zona verde mediante un proceso coordinado entre la comunidad, la alcaldía, la ESE local y la Secretaría de Ambiente. Se realizaron labores de limpieza, arborización y señalización, y se firmó un pacto de corresponsabilidad para el mantenimiento. La comunidad asumió turnos de vigilancia y organizó jornadas de

reciclaje, demostrando que la acción compartida genera resultados tangibles y sostenibles.

La coordinación de acciones compartidas en salud ambiental no se limita a sumar esfuerzos: implica construir confianza, co-crear soluciones y consolidar una cultura de colaboración en la que cada actor reconoce y valora su rol en el cuidado del entorno. Solo así es posible generar transformaciones duraderas que fortalezcan la salud y la sostenibilidad de los territorios.

2.4. Fomento del empoderamiento ciudadano en la gestión ambiental

El empoderamiento comunitario es un proceso mediante el cual las personas, familias y organizaciones sociales desarrollan la capacidad de influir, incidir y transformar las condiciones que afectan su salud y entorno. Supone avanzar de la dependencia institucional hacia la autonomía, el liderazgo y la acción colectiva, de modo que las comunidades dejen de ser receptoras pasivas de soluciones y se conviertan en protagonistas de su propio desarrollo.

Más que una estrategia técnica, el empoderamiento es una apuesta por la justicia social y ambiental, porque fortalece la equidad, la autodeterminación y la sostenibilidad territorial. En contextos de vulnerabilidad ambiental, pobreza o exclusión, este enfoque es fundamental para reducir brechas y garantizar condiciones de vida dignas.

El liderazgo comunitario constituye la columna vertebral del empoderamiento. No se limita a figuras visibles, sino que se expresa en agentes cotidianos de cambio: jóvenes, mujeres, adultos mayores, promotores ambientales, docentes, líderes étnicos, recicladores y cuidadores.

Características principales del liderazgo comunitario en salud ambiental:

- ✓ Compromiso ético con el territorio y su gente.
- ✓ Conocimiento profundo del contexto local.
- ✓ Escucha y diálogo con diversos actores.
- ✓ Capacidad para motivar, convocar y orientar acciones colectivas.
- ✓ Habilidad para convertir necesidades en propuestas concretas.

Empoderar significa también dotar a la comunidad de herramientas para que pueda participar y liderar procesos de salud ambiental de manera autónoma y sostenible. Esto abarca no solo formación técnica, sino también construcción de ciudadanía activa y corresponsable.

a) Capacidades a desarrollar:

- ✓ Análisis de problemáticas ambientales con enfoque social y de derechos.
- ✓ Conocimiento de normatividad en salud ambiental y participación ciudadana.
- ✓ Formulación de proyectos y planes de acción comunitarios.
- ✓ Manejo de herramientas de gestión (cronogramas, presupuestos y diagnósticos).
- ✓ Evaluación y seguimiento social de intervenciones.

b) Mecanismos de fortalecimiento:

- ✓ Escuelas de formación ciudadana en salud y ambiente.
- ✓ Tutorías comunitarias realizadas por aprendices del SENA.
- ✓ Redes de promotores ambientales locales.
- ✓ Procesos de autogestión con acompañamiento técnico.

La transformación comunitaria necesita procesos comunicativos potentes, incluyentes y creativos, que vayan más allá de la simple difusión de información. La comunicación, en este enfoque, es pedagógica y política, crea conciencia, convoca a la acción y fortalece la identidad territorial.

Para lograr este impacto, es necesario contar con estrategias concretas y claves de motivación que orienten la acción colectiva. Estas permiten que la comunicación se convierta en un motor real de transformación comunitaria, facilitando la participación activa, el compromiso y la sostenibilidad de los procesos.

a) Estrategias efectivas:

- ✓ Comunicación popular: teatro comunitario, murales, emisoras locales, ferias del saber.
- ✓ Redes sociales comunitarias: WhatsApp, Facebook, YouTube o TikTok para mensajes breves y directos.
- ✓ Narrativas de cambio: historias de líderes, podcast barrial y crónicas comunitarias.
- ✓ Campañas participativas diseñadas con la comunidad o en alianza con aprendices del SENA.

b) Claves de motivación:

- ✓ Vincular cada acción ambiental con beneficios visibles y tangibles.
- ✓ Reconocer públicamente los aportes comunitarios.
- ✓ Crear espacios de participación lúdicos, diversos e intergeneracionales.
- ✓ Transformar cada intervención técnica en una oportunidad educativa.

Estas reflexiones encuentran su mayor sentido cuando se aterrizan en experiencias concretas que muestran cómo la comunicación comunitaria impulsa cambios reales. Un ejemplo territorial de empoderamiento permite representar de manera práctica cómo las estrategias y claves se traducen en acciones que fortalecen la identidad, generan participación activa y consolidan procesos de transformación social.

Red de mujeres rurales gestoras de agua limpia – Cauca: en veredas del Cauca, mujeres cabeza de hogar organizaron comités para garantizar acceso al agua segura ante la ausencia institucional. Con apoyo de un centro de formación del SENA, fortalecieron sus capacidades en análisis de calidad de agua, diseño de filtros caseros, reforestación de microcuencas y exigibilidad del derecho al agua. Actualmente, integran mesas de concertación ambiental y lideran procesos formativos en otras comunidades.

3. Ejecución, seguimiento y ajuste del plan de acción

La ejecución del plan de acción representa la etapa en la que las propuestas diseñadas pasan del papel a la práctica. En este momento se ponen en marcha las actividades programadas, se movilizan los recursos humanos, técnicos y financieros, y se articulan los esfuerzos de los diferentes actores involucrados. La eficacia de esta fase depende de la organización, la comunicación constante y la disposición para enfrentar retos que puedan surgir en el proceso.

El seguimiento es esencial para garantizar que las acciones se desarrollen conforme a lo planeado. Este implica revisar periódicamente los avances, identificar desviaciones respecto a las metas y valorar el cumplimiento de los indicadores establecidos. Gracias a este monitoreo es posible detectar a tiempo obstáculos, generar alertas y mantener informados a los responsables del plan.

En la medida en que se avanza en la ejecución, pueden presentarse situaciones imprevistas que demanden ajustes. Estos pueden estar relacionados con la redistribución de recursos, la redefinición de prioridades o la modificación de estrategias que no resulten tan efectivas como se proyectaron inicialmente. El ajuste del plan no significa un retroceso, sino una respuesta flexible y estratégica que fortalece el proceso y permite alcanzar los resultados deseados a pesar de las contingencias.

De este modo, la ejecución, el seguimiento y el ajuste conforman un ciclo dinámico en el que cada acción retroalimenta a la siguiente, garantizando que el plan de acción se mantenga vigente, realista y adaptado a las necesidades del contexto.

3.1. Seguimiento a las actividades programadas

El seguimiento es un proceso sistemático que permite verificar el cumplimiento de las actividades definidas en el plan de acción. Su propósito es identificar avances, detectar dificultades y generar información que oriente la toma de decisiones oportunas.

Para realizar un seguimiento efectivo, se recomienda considerar las siguientes fases:

a) Definición de indicadores de seguimiento:

- ✓ Establecer indicadores claros, medibles y verificables que permitan evaluar el desarrollo de las actividades.
- ✓ Distinguir entre indicadores cuantitativos (número de reuniones realizadas y porcentaje de ejecución presupuestal) y cualitativos (nivel de satisfacción de los participantes y calidad de los productos entregados).

b) Recolección de información:

- ✓ Aplicar herramientas como listas de verificación, formatos de control, encuestas o reportes de avance.
- ✓ Designar responsables de registrar la información en cada actividad.
- ✓ Garantizar la periodicidad en la entrega de reportes (semanal, mensual o trimestral, según lo definido en el plan).

c) Análisis de avances y dificultades:

- ✓ Comparar los resultados obtenidos con lo planeado para identificar el nivel de cumplimiento.
- ✓ Detectar retrasos, obstáculos o desvíos en la ejecución.
- ✓ Reconocer logros y buenas prácticas que puedan replicarse en otras actividades.

d) Comunicación de resultados:

- ✓ Socializar los avances con el equipo de trabajo y las partes interesadas, asegurando transparencia y confianza.
- ✓ Elaborar informes periódicos que incluyan recomendaciones para mejorar la ejecución.

e) Retroalimentación y mejora continua:

- ✓ Proponer ajustes en la programación, asignación de recursos o metodología, de acuerdo con los hallazgos del seguimiento.
- ✓ Establecer compromisos específicos para superar las debilidades encontradas.

El seguimiento a las actividades programadas se convierte en un pilar fundamental para garantizar que el plan de acción se ejecute de manera ordenada, efectiva y con capacidad de adaptación a los cambios del entorno.

3.2. Gestión de recursos humanos, técnicos y financieros

La gestión de recursos es un aspecto esencial en la implementación de cualquier plan de acción, ya que de su adecuada administración depende el cumplimiento de las metas y la sostenibilidad de las actividades programadas. Esta gestión integra de manera coordinada tres tipos de recursos: humanos, técnicos y financieros.

- a) **Recursos humanos:** representan el talento y las capacidades de las personas que participan en la ejecución del plan. Su gestión implica:
 - ✓ Asignación de roles y responsabilidades, garantizando que cada integrante conozca con claridad sus funciones.
 - ✓ Capacitación y formación continua, para fortalecer competencias necesarias y mejorar la eficiencia en la ejecución.
 - ✓ Motivación y bienestar, fomentando un clima laboral positivo que estimule el compromiso con los objetivos.
 - ✓ Evaluación del desempeño, para identificar fortalezas, necesidades de mejora y ajustar procesos.
- b) **Recursos técnicos:** incluyen los equipos, herramientas y tecnologías que apoyan la implementación del plan. Su adecuada gestión abarca:
 - ✓ Disponibilidad de infraestructura y equipamiento, asegurando que se cuente con lo necesario para desarrollar las actividades.
 - ✓ Uso eficiente de herramientas tecnológicas, como software de gestión, sistemas de monitoreo o plataformas de comunicación.

- ✓ Mantenimiento preventivo y correctivo, evitando fallas que puedan retrasar la ejecución.
- ✓ Actualización tecnológica, incorporando innovaciones que mejoren los procesos y resultados.
- c) **Recursos financieros:** constituyen la base para financiar las acciones planeadas. Su administración debe ser transparente, eficiente y sostenible. Se consideran aspectos como:
 - ✓ Presupuestación detallada, definiendo costos directos e indirectos de cada actividad.
 - ✓ Priorización del gasto, destinando los recursos a las acciones de mayor impacto en el logro de objetivos.
 - ✓ Control y seguimiento financiero, garantizando el uso responsable del presupuesto y previniendo desviaciones.
 - ✓ Gestión de fuentes de financiación adicionales, a través de alianzas, convenios o proyectos que fortalezcan la ejecución.

En conjunto, la gestión articulada de los recursos humanos, técnicos y financieros permite no solo cumplir con lo establecido en el plan de acción, sino también generar sostenibilidad y capacidad de respuesta ante los retos que puedan surgir durante el proceso.

3.3. Resolución de conflictos en la implementación del plan

Durante la ejecución de un plan de acción en salud ambiental y seguridad sanitaria, es común que surjan conflictos o tensiones entre los actores involucrados. Estas diferencias pueden derivar de expectativas no cumplidas, comunicación

deficiente, distribución de responsabilidades, competencia por recursos, decisiones técnicas o culturales.

Lejos de ser obstáculos, los conflictos bien gestionados pueden convertirse en oportunidades para fortalecer la cohesión comunitaria, mejorar procesos participativos y garantizar una implementación más justa y efectiva. Por ello, es esencial que los aprendices del SENA, líderes comunitarios y funcionarios públicos cuenten con herramientas para identificar, comprender y transformar los conflictos de manera participativa y respetuosa.

A continuación, se describen los tipos de conflictos en la implementación de un plan:

- ✓ **Conflictos de comunicación:** Malentendidos o información poco clara. Por ejemplo, dos equipos ejecutan tareas duplicadas por falta de definición de responsabilidades.
- ✓ **Conflictos de recursos:** escasez o distribución desigual de recursos humanos, técnicos o financieros. Por ejemplo, diferentes áreas compiten por el uso de un mismo equipo tecnológico.
- ✓ **Conflictos de intereses:** objetivos personales o departamentales que no coinciden con los del plan. Por ejemplo, un área busca reducir costos mientras otra requiere inversión para mejorar procesos.
- ✓ **Conflictos de roles o responsabilidades:** falta de definición clara de funciones. Por ejemplo, duplicidad de tareas o vacíos de responsabilidad.
- ✓ **Conflictos culturales o de valores:** Diferencias en creencias, estilos de trabajo o tradiciones. Por ejemplo, la comunidad indígena que rechaza métodos técnicos de control de vectores por afectar prácticas ancestrales.

En este punto es importante definir técnicas de diálogo y mediación comunitaria:

- 1) **Escucha activa y empática:** Permitir que todas las partes expresen su punto de vista sin interrupciones, validando emociones.
- 2) **Círculos de diálogo:** espacios seguros para hablar y construir acuerdos, usando metodologías como el “círculo de la palabra”.
- 3) **Tercería o facilitación neutral:** Persona externa facilita consensos sin imponer soluciones.
- 4) **Mapeo del conflicto:** Identificación de actores, intereses, niveles de poder y posibles alianzas.
- 5) **Acuerdos escritos y públicos:** Registrar compromisos y decisiones para asegurar transparencia.
- 6) **Reconocimiento de errores y reparación:** aceptar fallas y generar mecanismos de reparación simbólica o material.

Con el fin de contextualizar la resolución de conflictos, se presenta un caso real práctico:

Disputa por lugar de ejecución de actividades

En una vereda rural, se acordó realizar una jornada de sensibilización ambiental en la escuela. Días antes, el presidente de la JAC solicita cambiar el lugar a la cancha comunal, generando oposición de los docentes. Se convocó una reunión abierta y se propuso dividir la jornada en dos momentos: actividad pedagógica en la escuela y comunitaria en la cancha. El acuerdo fortaleció la colaboración entre la escuela y la JAC, mostrando cómo un conflicto puede transformarse en oportunidad de participación y mejora.

La ejecución, el seguimiento y el ajuste de un plan de acción dependen de un trabajo articulado que combine planificación estratégica, gestión eficiente de recursos y resolución oportuna de conflictos. Estos procesos no solo aseguran la continuidad de las actividades programadas, sino que también permiten adaptarse a imprevistos, fortalecer el cumplimiento de los objetivos y generar aprendizajes valiosos para futuras intervenciones colaborativas.

3.4. Ajuste de estrategias según resultados y contingencias

Los planes de acción en salud ambiental deben ser dinámicos, porque los territorios cambian constantemente por factores sociales, climáticos, epidemiológicos o institucionales. Ajustar estrategias permite mejorar resultados, responder a emergencias y adaptar las acciones a la realidad de la comunidad.

A continuación, se describen los pasos para ajustar estrategias

a) Analizar resultados y retroalimentación:

- ✓ Revisar periódicamente los indicadores de proceso y resultado.
- ✓ Comparar lo planificado con lo realmente ejecutado.
- ✓ Recoger opiniones de la comunidad mediante encuestas, grupos focales o espacios de diálogo.
- ✓ Analizar informes, bitácoras y actas de seguimiento.
- ✓ **Por ejemplo:** un plan educativo sobre el uso del agua muestra buena asistencia, pero pocos cambios en hábitos familiares. Esto indica que las charlas magistrales no son suficientes y se decide implementar talleres prácticos y visitas domiciliarias.

b) Tomar decisiones informadas y participativas:

- ✓ Basarse en los datos del análisis y en la retroalimentación de la comunidad.
- ✓ Involucrar a actores clave en la definición de ajustes.
- ✓ **Documentar los cambios:** responsables, acciones y cronogramas actualizados.
- ✓ **Posibles ajustes:** redistribuir recursos, cambiar metodologías, reorganizar cronogramas, modificar roles.

c) Adaptarse al contexto y nuevos actores:

- ✓ Identificar emergencias o cambios en el territorio (climáticos, sociales, institucionales).
- ✓ Incluir nuevos actores que puedan fortalecer el plan (colectivos juveniles, organizaciones ambientales e instituciones educativas).
- ✓ Priorizar acciones inmediatas frente a contingencias.
- ✓ Redistribuir recursos y responsabilidades según nuevas necesidades.
- ✓ **Por ejemplo:** durante un plan de reciclaje, un deslizamiento contaminó el acueducto veredal. El equipo destinó recursos a educación sobre tratamiento doméstico del agua, gestionó filtros artesanales y reorganizó las actividades de reciclaje para después de la emergencia.

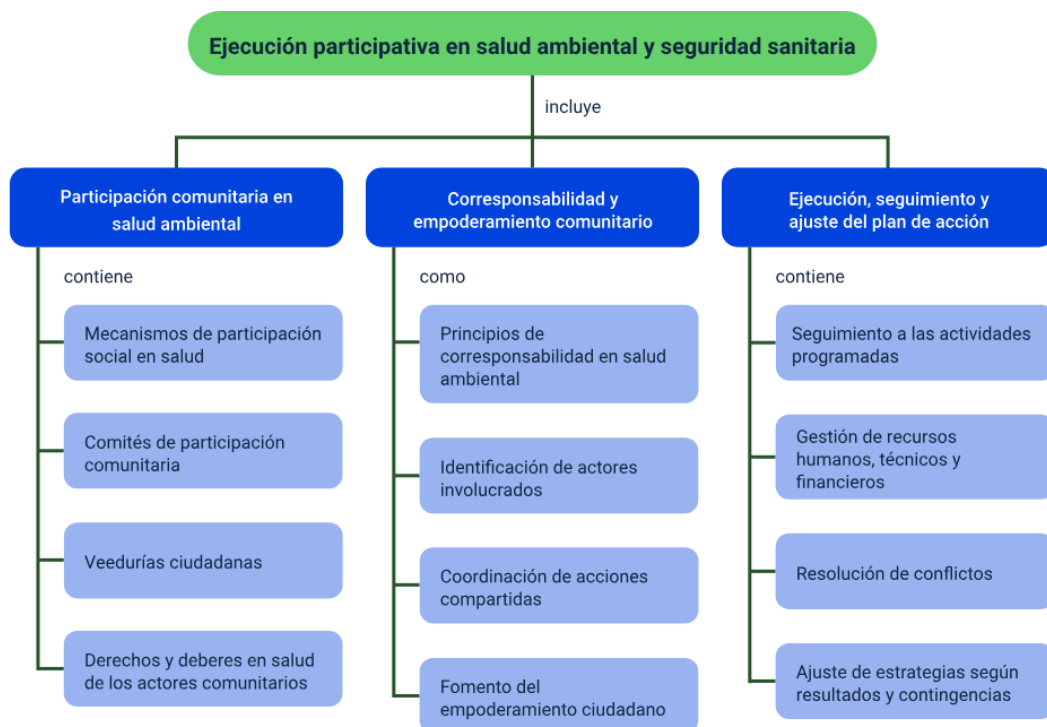
d) Evaluar aprendizajes y reforzar buenas prácticas:

- ✓ Reconocer fortalezas emergentes y soluciones exitosas.
- ✓ Incorporar aprendizajes en futuras intervenciones.
- ✓ Promover la cultura de adaptación y participación comunitaria.

El ajuste de estrategias garantiza que los planes de acción sean efectivos, legítimos y sostenibles. La flexibilidad, la información oportuna y la participación de la comunidad permiten responder a los cambios del entorno y mejorar continuamente los resultados.

Síntesis

La participación comunitaria en salud ambiental y sanitaria se fundamenta en la corresponsabilidad y el empoderamiento de la comunidad, mediante mecanismos sociales, comités y veedurías que garantizan la incidencia en la identificación de problemas, la toma de decisiones y la vigilancia del cumplimiento institucional. Los actores involucrados, como instituciones, organizaciones sociales, familias y personas, coordinan acciones compartidas, fortalecen capacidades locales y promueven la autonomía, el liderazgo y la corresponsabilidad en la gestión ambiental. La ejecución de los planes de acción requiere seguimiento constante de las actividades, gestión eficiente de recursos humanos, técnicos y financieros, resolución de conflictos y ajuste flexible de estrategias frente a resultados, contingencias o cambios en el contexto, asegurando así la efectividad, sostenibilidad y legitimidad de las intervenciones en los territorios.



Material Complementario

Tema	Referencia	Tipo de material	Enlace del recurso
Mecanismos de participación social en salud	Ecosistema de Recursos Educativos Digitales SENA. (2023). Mecanismos de participación [Video]. YouTube.	Video	https://www.youtube.com/watch?v=c3tlmvG1nwU
Corresponsabilidad y empoderamiento comunitario	Ecosistema de Recursos Educativos Digitales SENA. (2023). Orientar comunidades [Video]. YouTube.	Video	https://www.youtube.com/watch?v=pCwSNA8CJcA
Resolución de conflictos en la implementación del plan	Ecosistema de Recursos Educativos Digitales SENA. (2021). Conflictos en la comunicación y sus soluciones [Video]. YouTube.	Video	https://www.youtube.com/watch?v=A_qgEONAKhc

Glosario

Actores comunitarios: personas o grupos que participan activamente en la identificación de problemas, toma de decisiones y ejecución de acciones de salud ambiental en su territorio.

Autonomía: capacidad de la comunidad o individuos para tomar decisiones y actuar de manera independiente en la gestión de su entorno y salud.

Capacitación comunitaria: proceso de formación que fortalece conocimientos, habilidades y competencias para la gestión ambiental y sanitaria.

Corresponsabilidad: distribución equilibrada de roles, obligaciones y compromisos entre instituciones, comunidad y familias para la gestión de la salud ambiental.

Empoderamiento ciudadano: proceso mediante el cual las personas adquieren poder y capacidad para incidir en decisiones y transformar su entorno.

Equidad: reconocimiento de las diferencias sociales y territoriales, priorizando acciones para quienes tienen mayor vulnerabilidad.

Gestión de recursos: administración eficiente de recursos humanos, técnicos y financieros para garantizar la ejecución de los planes de acción.

Indicadores de seguimiento: herramientas que permiten medir avances, resultados y efectividad de las acciones implementadas.

Liderazgo comunitario: capacidad de ciertas personas para movilizar, motivar y coordinar acciones colectivas en beneficio de la comunidad.

Participación ciudadana: involucramiento activo de la comunidad en la planificación, ejecución, monitoreo y evaluación de acciones ambientales y sanitarias.

Plan de acción: conjunto de actividades programadas con objetivos, responsables, recursos y cronograma para mejorar la salud ambiental y sanitaria.

Resolución de conflictos: estrategias y mecanismos para enfrentar, mediar y transformar tensiones surgidas durante la implementación del plan.

Salud ambiental: condición de bienestar físico, mental y social de la población relacionada con la calidad del entorno y la prevención de riesgos ambientales.

Seguridad sanitaria: conjunto de acciones y medidas que garantizan la protección de la salud de la comunidad frente a riesgos biológicos, químicos o físicos.

Veeduría ciudadana: mecanismo de control social donde la comunidad vigila y evalúa la implementación de políticas y acciones en salud ambiental y seguridad sanitaria.

Referencias bibliográficas

Función Pública. (1991). Constitución Política de Colombia 1991.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125>

Función Pública. (1993). Ley 100 de 1993: Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5248>

Función Pública. (2015). Ley estatutaria 1751 de 2015: Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=60733>

Ministerio de Salud y Protección Social. (2017). Resolución 2063 de 2017: Adopta la política de participación social en salud (PPSS).

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%202063%20de%202017.pdf

Ministerio de Salud y Protección Social. (2022). Plan decenal de salud pública 2022–2031: Salud para la paz, la vida y la equidad.

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Milady Tatiana Villamil Castellanos	Responsable Ecosistema de Recursos Educativos Digitales (RED)	Dirección General
Diana Rocío Possos Beltrán	Responsable de línea de producción	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Christian Llano Villegas	Experto temático	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Viviana Esperanza Herrera Quiñonez	Evaluadora instruccional	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Oscar Ivan Uribe Ortiz	Diseñador web	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Juan Daniel Polanco Muñoz	Diseñador web	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Francisco José Vásquez Suárez	Desarrollador full stack	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Diego Fernando Velasco Güiza	Desarrollador full stack	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Ernesto Navarro Jaimes	Animador y productor audiovisual	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Jorge Eduardo Rueda Peña	Evaluador de contenidos inclusivos y accesibles	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Jorge Bustos Gómez	Validador y vinculator de recursos educativos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima